

CONTADORA Y ESQUIPULAS EN LA ESTRATEGIA REGIONAL

Por ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ-MONGE

Centroamérica es una región con serios problemas de tipo económico, político y social íntimamente relacionados entre sí. Estos problemas no son coyunturales, sino estructurales y están anclados en su propia historia.

El atraso centroamericano va ligado a la colonia y posteriormente, desde la independencia formal de las Repúblicas centromericanas en el año 1821, al desarrollo y a la hegemonía norteamericana así como a su intervencionismo fomentado por la doctrina Monroe.

Hay que subrayar el factor geopolítico, ya que América es un continente que divide de Norte a Sur nuestro planeta y Centroamérica se convierte por tanto en un elemento de unión entre las dos Américas, así como en un camino de comunicación entre dos océanos.

En consecuencia, el istmo centroamericano es uno de los espacios geográficos en que el concepto de geopolítica, es decir, que la geografía produce amplios efectos políticos, adquiere pleno significado y explica la hegemonía norteamericana con su consecuente intervencionismo.

A partir del año 1979 se produce un agravamiento o un afloramiento de la crisis, cuando un régimen político, el "sandinista" de Nicaragua, se instala en uno de los países de la región poniéndose en contradicción con los intereses de la potencia hegemónica, que en definitiva configuran la caracterización de la situación centroamericana. Este hecho, transformará la explicitación del conflicto en formas mucho más visibles.

Una zona tan estratégica como Centroamérica no puede permanecer ajena a las miradas de la sociedad internacional, de ahí que el proceso de paz en

el istmo no queda circunscrito a lo que sucede en esa región, sino que, de una manera u otra, tiene implicaciones para el mundo entero.

Estas implicaciones internacionales son las que han hecho que países no pertenecientes al istmo hayan sido los que han presentado las primeras propuestas de paz, existiendo un movimiento centrípeto que involucra cada vez más a las naciones centroamericanas y que por fin llegan a participar en su totalidad. Así a principios de la década de los años 80 se produce una serie de propuestas de paz que parten de los Estados Unidos, de México y de Nicaragua que no llegan a concluir con éxito.

El fracaso de estas propuestas fue debido al anquilosamiento de la diplomacia tradicional de la región, donde no se tenía en cuenta que la paz era una e indivisible, y que, para que esta paz exista en cada uno de los países, tiene que existir paz regional y viceversa. No se tenía en cuenta, que para que exista paz en Centroamérica tienen que haberse solucionado los conflictos internos en cada uno de los Estados que la componen, pero no cualquier paz, como consecuencia del aniquilamiento del contrario, sino la paz producto de la participación de cada uno de los actores que intervienen en el conflicto.

Estas primeras propuestas de paz, a pesar de su buena voluntad, eran excluyentes, no incluyendo a uno o a otro país o grupo armado según de donde partiese la propuesta y no consideraban que la paz no viene sola, sino que exige un proceso para que se puedan cambiar las condiciones objetivas donde ésta sea posible.

Finalmente, todas las propuestas de paz anteriores a Contadora, que no se basaban en conversaciones directas, no relacionaban la paz con los problemas estructurales que vivía la región, tales como los de carácter económico, social y político, así como de respeto de los derechos humanos.

La falta de éxito de todas estas propuestas de paz y la creciente tensión en la región centroamericana, motivó la creación del llamado Grupo de Contadora, integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela.

Los Gobiernos de estos países se pusieron en contacto en los preparativos de la reunión de países no alineados en Managua, instruyeron a sus cancilleres acerca de la delicada situación en Centroamérica, y fue así como acudieron a una reunión de urgencia, en la isla panameña de Contadora, en enero del año 1983.

Fruto de esta reunión fue el freno a la escala bélica en la región, incluso se evitó una intervención abierta de Nicaragua. Pero a pesar del esfuerzo,

Honduras y Nicaragua seguían acusándose de violaciones territoriales, lo que hizo necesario intensificar la labor diplomática y planificar acciones inmediatas teniendo como base el potenciar un clima de distensión que sin discriminaciones diese pase a las negociaciones. Esto motivó una nueva reunión del Grupo de Contadora que se desarrolló en Panamá en mayo del año 1983.

En esta reunión, en la que además de los cancilleres de los países del Grupo, estaban los de las cinco Repúblicas centroamericanas, se discutieron en forma global los acontecimientos que dificultaban la paz en la región. Debido a la falta de flexibilidad de los componentes de la mesa no se llegó a ningún tipo de acuerdo, suponiendo esta reunión un estancamiento en el proceso de paz.

Ante las nuevas amenazas de signos bélicos ocurridos entre Honduras y Nicaragua en el mes de junio, los presidentes del Grupo de Contadora deciden reunirse de nuevo en México durante el mes de julio del año 1983, como respuesta a esa acumulación de signos, donde las premoniciones de una guerra generalizada eran práctica diaria.

El objetivo central de este encuentro era analizar el proceso de negociación emprendido por el Grupo de Contadora para evitar el estallido de un conflicto generalizado en la región, estudiándose como condiciones indispensables para alejar el peligro de la guerra, la salida de los asesores militares, la limitación de la carrera armamentista, la eliminación del tráfico de armas y el cese de la utilización de los países de la región para agredir a otros.

En esta reunión se trató de forma diferente la situación en El Salvador, país considerado con una fuerte crisis interna, y el conflicto bilateral entre Honduras y Nicaragua, llegándose a los acuerdos de que el uso de la fuerza como alternativa de solución no resolvía sino que agravaba las tensiones subyacentes. La paz en Centroamérica sólo podrá ser una realidad en la medida en que se respetasen los principios fundamentales de la convivencia entre las naciones: la no intervención, la autodeterminación, la igualdad soberana de los Estados, la cooperación para el desarrollo económico y social, la solución pacífica de controversias, así como la expresión libre y auténtica de la voluntad popular. Todas las medidas orientadas a la eliminación de los factores que perturban la paz regional, deben ir acompañadas de un gran esfuerzo interno para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la observación de los derechos humanos. Con esta perspectiva debe enfrentarse el atraso económico que está en la raíz de la inestabilidad regional, pero el esfuerzo propio debe completarse con el

apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los países industrializados mediante créditos de fomento, programas de cooperación y el acceso de los productos centroamericanos a sus mercados.

Después de la cumbre de México, los presidentes de Panamá y Colombia efectuaron una gira por Honduras, Guatemala y El Salvador llevando a cabo contactos diplomáticos y buscando el respaldo de los países del área a la propuesta salida de la reunión.

Un principio esperanzador aparece en el mes de agosto, cuando tanto Reagan como Castro moderan sus posturas y hacen públicas sus disposiciones para acabar con el apoyo militar a las diversas facciones políticas de Centroamérica. Empieza una época de negociaciones entre "todas las partes implicadas".

En el mes de agosto tuvo lugar otra reunión del Grupo de Contadora en Panamá, que congregó también a representantes gubernamentales de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Aquí se estudió el documento de trabajo aportado por el Grupo de Contadora en su reunión mexicana para llegar a una paz generalizada y duradera en el área centroamericana, así como una propuesta nicaragüense, el denominado "plan de paz" hondureño y otra opción presentada conjuntamente por Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Del análisis de estos documentos podría deducirse el primer acuerdo viable de paz en Centroamérica. El Grupo de Contadora estaba utilizando un método de trabajo nuevo a base de conversaciones directas, constantes propuestas, aumentando el coste político de oportunidad para el uso de la fuerza, deslegitimando aún más la posible intervención de Estados Unidos y reactivando la conciencia latinoamericana en el sentido bolivariano.

Desde la constitución del Grupo de Contadora hasta la reunión de Panamá en junio de 1986, el Grupo desplegó una incansable actividad mediadora, sobre el principio de solución pacífica y negociada de los conflictos, en cuyo marco fue posible el diálogo directo entre los presidentes y cancilleres de los países centroamericanos. La dinámica de su labor diplomática y las propuestas pacificadoras vertidas en las distintas redacciones del Acta de Contadora y otros documentos afines dieron al Grupo un protagonismo, que se vio acrecentado por la falta de voluntad política de los países centroamericanos para llegar a unos puntos de acuerdo.

Era evidente que la actuación de Contadora en la búsqueda de fórmulas para la paz no podía eternizarse, por la necesidad urgente de llegar a

compromisos que evitasen un conflicto generalizado en la región, y por el desgaste y consiguiente descrédito que ello podía acarrear para la propia iniciativa mediadora. Consciente de esta situación, el propio Grupo, con anterioridad a la cumbre de Panamá, advertía de la dificultad para continuar con su gestión si los presidentes centroamericanos no aceptan sus propuestas. Así en la reunión de Panamá, tras el desencanto que supuso que los cancilleres centroamericanos no firmaran el acta de pacificación, el Grupo de Contadora quedaba prácticamente disuelto, ya había cumplido su misión. Ahora, la responsabilidad estaba en manos de los propios países de la región.

La respuesta a esa llamada de asumir la responsabilidad, se inicia con el "Plan Arias" en el mes de febrero de 1987. El presidente de Costa Rica, Óscar Arias presentó una propuesta para establecer una paz firme y duradera en Centroamérica en una reunión celebrada en San José y que congregó a los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua —en calidad de observador—.

Con el "Plan Arias" se siembra la semilla de una búsqueda de la paz desde la responsabilidad intransferible de Centroamérica. Consta de 10 puntos que versan sobre las siguientes cuestiones:

- Reconciliación nacional (amnistía y diálogo).
- Cese el fuego.
- Democratización.
- Elecciones libres.
- Supresión de la ayuda militar.
- No uso del territorio para agredir a otros Estados.
- Reducción del armamento.
- Supervisión nacional e internacional.
- Evaluación de los progresos hacia la paz.
- Democracia y libertad.

El camino entre el "Plan Arias" y su concreción en el Acuerdo de Guatemala no fue fácil, la propuesta de Arias tenía ya un defecto de partida al pretender excluir a Nicaragua de la discusión del proyecto hasta que los otros cuatro países llegaron a un acuerdo. Así que hubo que suavizar la postura y modificar este punto, comprendiendo que ningún país centroamericano podía quedar excluido en la resolución de los problemas de la región. De hecho en el "Plan Arias" se reconoce y acepta la continuidad del régimen sandinista.

Las maniobras dilatorias y obstruccionistas de la Administración Reagan pronto se dejarían sentir (como había ocurrido respecto al Acta de

Contadora. Washington no tardó en dejar claro que la iniciativa del presidente de Costa Rica no le era satisfactoria, siendo evidente que se oponía a puntos fundamentales de la estrategia de los Estados Unidos, como por ejemplo aceptar la continuidad del Gobierno de Managua, prohibir el uso del territorio para agredir a otro Estado e impedir la ayuda extranjera a fuerzas irregulares, sin que antes los sandinistas hubieran hecho concesiones hacia una transformación radical del régimen. Reagan hizo público un "plan de paz" alternativo al "Plan Arias".

A pesar del desconcierto que originó el plan norteamericano, dio comienzo en el mes de agosto del año 1987 la cumbre de presidentes centroamericanos, que en un ambiente pesimista y en ocasiones tenso, llegó a un desenlace no augurado por las expectativas iniciales: el Acuerdo de Guatemala.

La dinámica que tomó la reunión hizo a las delegaciones de los cinco países ir más allá de lo que en un principio hubieran imaginado; y, curiosamente el "Plan Reagan" incidió de alguna forma en una excepcional y sorprendente muestra de una autonomía relativa de la región centroamericana frente a la gran potencia del Norte. El éxito de la reunión se debió también a las gestiones del presidente Arias, al apoyo internacional a su plan, a la debilidad coyuntural de la Administración norteamericana por el escándalo "Irán-contra", al fracaso de la política de presión contra Nicaragua y sobre todo al sufrimiento del pueblo centroamericano en medio de una crisis que, en diversos ámbitos (político, económico, social...) estaba urgentemente necesitando de medios de transformación profunda.

Con el Acuerdo de Guatemala conocido como Esquipulas II se centroamericaniza el proceso de negociación; se descubre, dentro del marco latinoamericano de Contadora el centroamericanismo, y cobra una fuerza endógena para la paz, la democratización y el desarrollo, frente a las fuerzas exógenas que postulan en enfrentamiento y propenden a soluciones de guerra.

Las características de este Acuerdo-Tratado de Esquipulas II son entre otras: culminar la labor de Contadora y abrir el camino para la pacificación centroamericana sobre el fundamento de compromisos concretos; posibilita el diálogo interno entre Gobiernos y fuerzas opositoras hacia la reconciliación nacional; abre caminos para la revitalización democrática de la región; legítima a los regímenes respectivos de los cinco países centroamericanos; rompe la unidad Costa Rica-El Salvador-Honduras-"contras", así como la unidad Nicaragua-FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional);

excluye soluciones militares a la crisis regional, deslegitimando además cualquier tipo de intervención en los asuntos internos de otro Estado, al acotar el conflicto en el marco nacional y regional, lo desinternacionaliza, haciendo inoperante el planteamiento de confrontación Este-Oeste; ofrece los fundamentos para que la seguridad regional, basada en la pacificación, democratización, desarrollo e integración, sin intervencionismos y con respeto al principio de autodeterminación, sin intervencionismos y con respeto al principio de autodeterminación, sea compatible con la seguridad de los Estados Unidos; propugna la verificación de la democratización de la región a través de la completa libertad de los medios de comunicación, del pluralismo político partidista total y de la desaparición de los estados de excepción, sitio o emergencia; crea una nueva institución supranacional: el Parlamento Centroamericano, y deja la puerta abierta a otras iniciativas y planteamientos de integración.

El Acuerdo de Guatemala establece un plazo de 90 días para el cumplimiento de temas referentes al alto el fuego, democratización, cese de la ayuda militar, y no uso del territorio para agresiones; en las demás cuestiones se fija un calendario general para el cumplimiento de lo acordado.

De Esquipulas II se desprende una institucionalización y formalización del proceso de paz a través de órganos que ya funcionaban, como la reunión de presidentes o la Comisión Ejecutiva formada por los cinco ministros de Asuntos Exteriores, si bien se le fija el objetivo de reglamentar, impulsar y realizar el cumplimiento de los acuerdos, así como organizar las comisiones de trabajo que conduzcan al cumplimiento de los compromisos instituidos dentro de los plazos estipulados. Otros instrumentos son nuevos como las Comisiones de Reconciliación, la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento y la constitución del Parlamento Centroamericano.

A los 90 días de la firma del Acuerdo de Guatemala, un país centroamericano se ajustó estrictamente a los plazos, dos más cumplieron inmediatamente después, y los dos restantes, uno que era favorable y otro que rechazaba la formación de la Comisión Nacional de reconciliación, acabaron cumpliendo al final del período. Esto demuestra la función positiva de los plazos: si un número de países cumple en torno a ellos, produce un efecto de arrastre hacia los rechazados. Pero existe el peligro de iniciar una dinámica que expresa la tentación de desplazar los problemas difíciles para más adelante, otorgándole plazos más largos, en un proceso *sine die*, desdibujando una característica fundamental de Esquipulas II consistente en fijarse objetivos y plazos para cumplirlos.

Dos de los plazos marcados por Esquipulas II, eran de 120 días para el análisis por parte de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento del progreso en el cumplimiento de los acuerdos previstos y de 150 días para la reunión de los presidentes centroamericanos donde recibirían un informe de la citada Comisión y tomarían las decisiones pertinentes.

En este período de tiempo se produjeron avances y fracasos, debidos estos últimos a las crisis internas de varios países del área donde los diferentes grupos alzados en armas se negaban a admitir a sus respectivos Gobiernos como legítimos, desconfiando de ellos, y por tanto no buscando la negociación, ignorando que el cese de las hostilidades no obligaba a estos grupos a desarmarse de forma inmediata.

A pesar de los inconvenientes, y siguiendo lo acordado en Esquipulas II, se produjo la reunión cumbre de presidentes centroamericanos en San José de Costa Rica en el mes de enero del año 1988, llamada por algunos Esquipulas III. Tras esta reunión, el proceso de paz se orientó en tres sentidos: una exigencia drástica a los compromisos sobre la democratización y una exigencia enfática de cumplimiento inmediato.

Respuesta a esta llamada a la inmediatez hubo por parte de la Presidencia de Nicaragua, quien anunció en el mismo acto de clausura de la cumbre, su disposición a llevar adelante una serie de medidas pendientes, entre las que destacan el levantamiento del estado de emergencia y la decisión de negociar con las fuerzas irregulares de forma directa.

El largo y difícil camino de la paz en Centroamérica, que se inició en Contadora y continuó en Esquipulas, aún tiene mucho trecho por recorrer, es cierto que se han dado pasos de gigante en un momento donde la guerra abierta y generalizada estaba a punto de producirse, pero la solución de los problemas no es fácil en una región cuya economía depende de la exportación de un número pequeño de productos primarios (economía de postres: azúcar, café, plátano...) y cuya deuda exterior sobrepasa los 1.800 millones de dólares.

Después de la cumbre de San José, la situación en Costa Rica permanece inalterada. Su democracia es la única consolidada en Centroamérica y su sistema sigue resistiendo las presiones de las dificultades económicas y la crisis de la zona. Los refugiados constituyen un problema para el país. Costa Rica es el máximo receptor de refugiados en la zona; se estima que hay alrededor de 82.500, de los cuales más de 60.000 son nicaragüenses y continúa aún el flujo de entrada en "nicas" en el país.

En uno de los pocos países del mundo donde no existe ejército, se produjo a partir del año 1985 un fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad nacionales de una tendencia hacia la paramilitarización, pero a pesar de las divisiones en el seno de la sociedad relativas a los conflictos políticos en la región y el papel de Costa Rica en la crisis, no se ha llegado a una polarización política preocupante.

Las críticas internas a la posición gubernamental respecto a Nicaragua y a la crisis regional se han reducido. El prestigio que le ha otorgado al presidente Óscar Arias la concesión del Premio Nobel de la Paz 1987 ha ayudado a frenar las críticas de aquellos que hubieran preferido una postura activamente antisandinista. Los claros esfuerzos de Arias por evitar cualquier uso del territorio costarricense para acciones armadas contra el Gobierno nicaragüense, han aplacado las acusaciones de incapacidad de poner en práctica la posición de paz y neutralidad del país.

Actualmente, su Parlamento debate la incorporación de Costa Rica en el Parlamento Centroamericano, con lo que la formación de este organismo supranacional ha tenido que retrasarse. Paradójicamente, el país seno del "Plan Arias", instigador del Parlamento Centroamericano y precisamente por su propio proceso democrático, es el único que pone obstáculos a la creación inmediata del Parlamento que agrupe a las cinco Repúblicas centroamericanas.

En El Salvador la guerra continúa en un punto muerto. Las FAS son ahora más eficaces en el campo, y se realizan esfuerzos para incrementar los programas de acción cívica y mejorar el comportamiento y la conciencia respecto de los derechos humanos. No obstante, aún subsisten deficiencias militares y serios abusos. El Ejército no puede prevenir la actividad guerrillera y no se prevé la eliminación militar de las fuerzas guerrilleras.

El FMLN cuenta aún con unos 6.000 a 7.000 combatientes y sigue en armas en gran medida gracias a la captura de armamento y municiones, a la fabricación casera de minas y morteros y a la obtención de fondos mediante "impuestos de guerra". El FMLN continúa causando graves daños en grandes áreas del país a través del desplazamiento económico y el sabotaje; no obstante no han logrado movilizar un amplio apoyo urbano y su imagen se ha deteriorado debido a las víctimas civiles causadas por sus minas, los destrozos económicos y sus propios asesinatos y abusos.

El número de personas desplazadas en El Salvador es enorme, elevándose a unas 500.000 y los recursos necesarios para paliar el problema son impresionantes aún en tiempos de paz. Causa preocupación la situación de

los 4.300 refugiados salvadoreños que regresaron de Honduras en el mes de octubre del año 1987, al encontrar las agencias de ayuda de ciertas dificultades para asegurarles la subsistencia.

Tras las pasadas elecciones en marzo del año 1989 y el triunfo de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), junto con la violenta campaña que lanzó en FMLN en contra de los comicios, a los que denunciaban como farsa, parecen alejarse aún más las perspectivas de cualquier arreglo político, por el contrario puede producirse tanto un incremento de la violencia política como una tendencia hacia la polarización. Esto se debe en gran medida a que no sólo ha surgido una desilusión popular frente a la Democracia Cristiana, sino también un sentimiento de que el tan pregonado sistema electoral, en realidad no ha ocasionado muchos cambios en la vida de los ciudadanos, lo que crea la posibilidad de que todo el ensayo de establecer unas instituciones democráticas fiables y unas alternativas políticas moderadas pueda verse en peligro.

En Guatemala continúa el conflicto armado pero a un nivel muy bajo comparado con los de El Salvador y Nicaragua. Las fuerzas de la guerrilla agrupadas en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) no presentan por sí mismas ninguna amenaza para el Gobierno. Aunque pueden operar en grandes áreas y las FAS tienen sus puntos débiles particularmente en el sector del transporte, las fuerzas guerrilleras no sobrepasan los 200.000 miembros y sólo atacan con poca frecuencia y a pequeña escala, mientras que el Ejército, que cuenta con 38.000 hombres, mantiene una fuerte estructura de control rural. El papel de las Fuerzas de Seguridad guatemaltecas sigue siendo una cuestión candente con respecto a la situación de los derechos humanos, a pesar de que el nivel de abusos ha descendido.

El proceso de democratización que condujo a un Gobierno civil moderado en Guatemala en el año 1986 no se ha interrumpido, si bien siguen existiendo muchos problemas y amenazas para una institucionalización democrática y desarrollo estable mediante continuos rumores e intentos de golpe de estado.

El Gobierno guatemalteco argumenta que no hay ningún contenido político posible en unas negociaciones con los grupos armados, e incluso un cese el fuego es un proceso inapropiado para el país dado el tamaño y la naturaleza de las fuerzas guerrilleras. Considera que la amnistía que se ofrece bajo Esquipulas II es generosa, al no exigir una presentación de las personas que deseen acogerse a ella exclusivamente ante las autoridades

militares, ofreciendo de hecho la posibilidad de acudir a las Universidades, la Iglesia y la Cruz Roja y prometiendo que no se conservarán registros. No obstante, a finales del año 1988, el Gobierno dijo que estaba dispuesto a dialogar con la URGN en el marco de Esquipulas, y aceptó una posible mediación del arzobispo de Guatemala.

En Honduras existen serios problemas referentes al gran número de refugiados, estimados a finales del año 1987 en 68.000, 43.000 nicaragüenses, 24.000 salvadoreños y 1.000 guatemaltecos. En ese año fueron repartidos un total de 9.000 refugiados salvadoreños y nicaragüenses.

En el mes de marzo del año 1988 se produjo un incidente fronterizo con Nicaragua, con lo que aumentó la tensión en la zona, sobre todo tras el envío a Honduras de 3.200 soldados estadounidenses. Este hecho aumentó la sensibilidad que se respiraba en amplios sectores de la población hondureña acerca del papel que desempeñaba su país en la crisis regional y sobre la imagen de subordinación que ofrecía respecto de los intereses y la política estadounidense. No obstante, a menudo se han dado incidentes fronterizos en el curso de la guerra, y en sólo dos ocasiones ha habido una escalada con la intervención de las Fuerzas Aéreas hondureñas y algún tipo de ayuda norteamericana. En ambos casos, la escalada del incidente coincidió con el esfuerzo por parte de la Administración Reagan de vencer las dificultades para aportar ayuda a la "contra". Por un lado, los sandinistas han explotado de alguna manera la situación creada por dichas dificultades para infligir duros golpes a los "contras" contribuyendo así a provocar incidentes de mayor escalada. Por otro lado, la Administración estadounidense ha utilizado dichos incidentes para recuperar el apoyo a su política. El escándalo de marzo se amoldaba en lo general a dicho esquema.

Existe la impresión generalizada de que si no estuvieran ahí los "contras", tales incidentes no ocurrirían. Es más, se ha fortalecido la antipatía hacia ellos en muchos sectores por los problemas directos que supone su presencia para los hondureños. En particular, se estima que entre unas 1.500 a 1.600 personas, principalmente pequeños productores de café, han sido desplazados de sus terrenos en los departamentos de El Paraíso y Olancho en el sur de Honduras como resultado de la presencia de los "contras" y el conflicto que ello implica.

Nicaragua sigue siendo el foco internacional de la crisis centroamericana y su Gobierno se enfrenta a una considerable oposición tanto política como armada dentro de una situación económica desastrosa y que tiene serias consecuencias para las condiciones de vida de la población.

Después del levantamiento del estado de emergencia de enero del año 1988, la actividad de la oposición ya no se enfrenta con las restricciones formales previas, pero se han dado casos en que sus manifestaciones han sufrido ataques por parte de bandas "prosandinistas". El diálogo nacional permanece congelado totalmente hasta mediados del mes de marzo, mientras que los 14 partidos y agrupaciones políticas continuaban insistiendo en que era esencial la aceptación sandinista de sus 17 puntos para la reforma constitucional.

El proceso de negociación en Nicaragua comenzó orientándose hacia la búsqueda de un acuerdo de alto el fuego. Un primer encuentro directo en San José en el mes de enero del año 1988 terminó en fracaso al insistir la delegación de la resistencia nicaragüense en la inclusión de cuestiones políticas y relacionar explícitamente su postura con las reivindicaciones políticas de la oposición civil. Los sandinistas seguían manteniendo su postura de que no podían incluirse estas cuestiones y que el proceso de alto el fuego debía ser independiente, o mejor, previo al diálogo con los grupos políticos no armados y aquellos que habían aceptado la amnistía según se establecía en los acuerdos de Esquipulas.

En el mes de marzo se acordó realizar un nuevo encuentro en Sapoá, cerca de la frontera con Costa Rica. El incidente fronterizo con Honduras llevó a los líderes de la resistencia nicaragüense a anunciar que no asistirían a la reunión en tales circunstancias, postura que fue interpretada como un reflejo de las esperanzas que seguían albergándose de que, sí podía demostrarse que los sandinistas no cumplían los acuerdos de Esquipulas —bien porque no respondían a las demandas internas de democratización porque amenazaban a sus vecinos— entonces aún podía contarse con una renovación de ayuda militar estadounidense.

Aunque siguen siendo inciertas las esperanzas de paz en Nicaragua, la firma de un acuerdo provisional, después de tantos años de conflicto y de frustración de los esfuerzos para una paz en la zona, ha fundamentado un cauto optimismo y ha impulsado medidas para darle nuevo ímpetu al proceso de Esquipulas.

La existencia del Acuerdo de Guatemala hace pensar que la paz es posible en Centroamérica, no obstante y siguiendo la filosofía del proceso, para que esta paz sea duradera, se necesita un cambio estructural en la región, y éste sólo es posible a través de una importante cooperación de carácter multilateral. Esta ayuda que debe ser condicionada políticamente sólo puede venir de Europa y concretamente de la Comunidad Europea.

La cumbre de San José dejó abierto el futuro de la cooperación y de los mecanismos de verificación del proceso de paz. La Comisión Ejecutiva de Esquipulas, compuesta por los cinco ministros de Relaciones Exteriores desempeñaría la función de verificación, buscando el apoyo exterior que estimara apropiado y juzgando que Europa Occidental debía desempeñar un papel más activo en el proceso de paz al igual que en la cooperación al desarrollo.

En el mes de marzo del año 1987 se celebró en Hamburgo una conferencia sobre diálogo político y cooperación económica entre la Comunidad Europea y los países centroamericanos. Estos presentaron un nuevo plan de acción inmediato conjunto, para el cual estaban buscando una cooperación internacional. La primera parte era un plan de emergencia a corto plazo, en el que se identifican cinco áreas prioritarias: ayuda alimenticia; fondo de emergencia para la reactivación económica de Centroamérica; energía, deuda exterior; ayuda a los refugiados y desplazados. La segunda parte se componía de una serie de medidas a medio plazo para reactivar el proceso de integración económica y el desarrollo social. Con respecto al plan de emergencia, en los comunicados finales se declaró que la Comunidad Europea incrementaría sus esfuerzos en los que ya se había mostrado activa, principalmente en los programas de ayuda alimentaria y de refugiados, y que estudiaría los medios de participar en las medidas de reactivación propuestas. También continuará fortaleciendo su programa de cooperación al desarrollo, que ya ha llevado a la duplicación de la ayuda comunitaria y de sus Estados miembros desde el año 1984, que se cifra actualmente en un 20 por 100 del total de la ayuda que recibe Centroamérica.

En el sector político, la Comunidad Europea ofreció ayuda para el establecimiento del Parlamento Centroamericano. Los países de Europa Occidental declararon también estar dispuestos a contribuir en la medida de lo posible a la realización de la labor de verificación, control y seguimiento otorgada a la Comisión Ejecutiva si todos los países centroamericanos solicitan su "ayuda".

En las conversaciones de paz de Sapoá en Nicaragua, el Gobierno de ese país propuso que la Comisión de Verificación fuera un amplio órgano internacional, incluyendo a Canadá y a varios países de Europa Occidental. En el acuerdo final, sin embargo, se le confiaba la verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

No obstante, en la siguiente reunión de los ministros de Asuntos Exteriores celebrada en el mes de abril del año 1988, se llegó a un acuerdo para

solicitar conjuntamente a Canadá, España y a la República Federal de Alemania su participación en la verificación del proceso de Esquipulas. En cualquier caso, queda claro que se sigue buscando con ahínco la participación europea para apoyar tanto el proceso de paz y la democratización, como el desarrollo económico y social que a largo plazo es fundamental para su éxito.